

Santiago, cuatro de octubre de dos mil veinticuatro.

Vistos y oídos los intervinientes:

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, por sentencia de veintinueve de julio de dos mil veinticuatro, dictó sentencia definitiva a través de la cual se condena a OSCAR FÉLIX VERGARA CALDERÓN, a la pena de siete (7) años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de diez (10) unidades tributarias mensuales (UTM), más las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, como autor de un delito reiterado de estafa y un delito reiterado de apropiación indebida, previstos y sancionados en el artículo 467 en relación con el artículo 468, y artículo 470 número 1, respectivamente, todos del Código Penal, en grado de consumado, perpetrado en contra de la víctima Centro de Recuperación y Cobranza Ltda. Atendida la extensión de la pena impuesta, no se otorgan al sentenciado los beneficios de la Ley N° 18.216.

La sentencia previamente individualizada fue impugnada a través de un recurso de nulidad interpuesto por la defensa del sentenciado, invocando la causal prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal.

Este tribunal decidió admitirlo a tramitación, fijándose la audiencia del día 17 de septiembre del año en curso para llevar a cabo su conocimiento, oportunidad en que se escucharon los alegatos de los intervinientes.

Considerando:

Primero: Que, como se refirió, la defensa invocó la causal de nulidad prevista en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, sosteniendo que los sentenciadores han realizado una errónea aplicación de las normas contenidas en el artículo 351 del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 467, 468 y 470 N°1 todos del Código Penal.

Al fundar el arbitrio, luego de extractar el fundamento noveno del fallo impugnado, refiere que el tribunal yerra al descartar la aplicación del delito continuado en el caso de autos, por el solo hecho de no estar regulado en la ley. En este sentido, explica que, si bien no existe una regulación normativa expresa, lo cierto es que constituye una institución jurídico penal



de vasto reconocimiento en el medio local tanto por la doctrina penal más autorizada, como por los Tribunales Superiores de Justicia.

Luego de conceptualizar el delito continuado, refiere los requisitos que deben concurrir en las diversas acciones que han de ser unificadas por medio de su valoración como un delito continuado, señalando que el tribunal yerra al sostener que existe discrepancia en la doctrina en cuanto a exigir unidad en el sujeto pasivo, toda vez que sobre dicho requisito existe acuerdo en la doctrina en exigirlo solo cuando los bienes jurídicos afectados son de carácter personalísimo, lo que no aplica en la especie, en que está afectado el patrimonio económico.

Añade que, no obstante lo dicho, en este caso debe considerarse que para todas las conductas se está frente a un mismo sujeto pasivo, que es el patrimonio del Centro de Recuperación y Cobranza Ltda. del Banco Scotiabank y no los clientes, puesto que el Banco es el custodio de los valores de sus clientes, en consecuencia, desde el momento que se lo entregan al banco, éste se hace dueños de aquellos y, correlativamente, los clientes obtienen un crédito en su favor.

En consecuencia, explica, no se está en presencia de delitos de la misma especie en carácter de reiterados, sí no de un solo delito continuado, que implica, por la cuantía de lo defraudado, aplicar la pena establecida en el artículo 467 N°1 del Código Penal, por lo que se debió condenar al recurrente a una pena única tres (3) años de presidio menor en su grado medio y no aquella que fue aplicada.

Segundo: Que, reiteradamente ha señalado esta Corte, que el recurso de nulidad reglado en el estatuto procesal penal ha sido instituido por el legislador para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva o solamente ésta, por las causales expresamente señaladas en la ley, esto es, por contravenciones precisas y categóricas cometidas en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento del veredicto, abriendo paso a una decisión de ineficacia de todos aquellos actos que, dada la causal elegida por el recurrente ubicada dentro de las denominadas motivos absolutos de nulidad, importan necesariamente un perjuicio para el interviniente y, sustancial, desde el momento en que constituyen una infracción manifiesta a las garantías.



Tercero: Que, respecto de la causal de nulidad invocada, se debe señalar que letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal establece como causal de nulidad del juicio oral y de la sentencia: “Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”.

A través de causal antes referida nuestro legislador busca entregar certeza jurídica en la aplicación del derecho, siendo relevante señalar que aquella se configura, entre otros casos, al vulnerar el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirve de base para la dictación de la sentencia o cuando se aplica determinada norma a una hipótesis no regulada por ella o se deja de aplicar aquella que regula la materia de que se trate.

Así, lo relevante en esta causal, es que en su análisis sólo se debe establecer si la aplicación del derecho se ajusta a los hechos asentados por el tribunal, que son inamovibles para esta Corte.

Cuarto: Que, en la sentencia recurrida se establecen los hechos siguiendo el criterio establecido en la acusación, en el que se agrupan un conjunto de conductas bajo la denominación “Hecho N°1”, “Hecho N°2” “Hecho N° 3”.

HECHO N° 1: “El imputado Oscar Félix Vergara Calderón, ya individualizado, quien era trabajador del área filial de Centro de Recuperación y Cobranza (en adelante CRC) del Banco Scotiabank desde el año 2013 y hasta el momento de su detención el 23 de noviembre de 2022, desempeñando funciones en calle Agustinas N° 1185, comuna de Santiago Centro, tenía a su cargo y resguardo los dineros contenidos en la cuenta corriente N° 61497100 que tenía el CRC en el Banco de Crédito e Inversiones, ya que una de sus funciones como ejecutivo de servicios era realizar las conciliaciones y cuadraturas de los montos que se encontraban en dicha cuenta. En virtud del mencionado cargo es que al acusado se le confió el dispositivo “digipass” o de claves dinámicas, el cual es entregado por el Banco de Crédito e Inversiones para realizar distintas transferencias electrónicas de fondos, como mecanismo de seguridad para prevenir fraudes. Es así como, teniendo conocimiento del cargo y funciones que este prestaba, sobre todo considerando la relación de confianza depositada en él por parte del banco, el acusado procedió, a partir del mes de Marzo del



año 2019, a ingresar en la página web del Banco BCI, posteriormente escribía las credenciales correspondientes a la cuenta corriente del área de CRC, cargando la cuenta corriente, y se agregó como destinatario de transferencias electrónicas de fondos y se depositaba cuantiosas sumas de dinero a su cuenta corriente personal del Banco Scotiabank N° 972015898”.

A continuación se detallan 12 operaciones, en que se establecen las transferencias realizadas 1) el día 16 de marzo del año 2019, por \$5.000.000; 2) El día 6 de abril del año 2019, por \$5.000.000; 3) El día 18 de mayo del año 2019, por \$5.000.000; 4) El día 8 de junio del año 2019, por \$5.000.000; 5) El día 5 de septiembre del año 2019, por \$7.000.000; 6) El día 16 de septiembre del año 2019, por \$7.000.000; 7) El día 23 de septiembre del año 2019, por \$7.000.000; 8) El día 16 de noviembre del año 2019, por \$1.400.000; 9) El día 7 de diciembre del año 2019 por \$7.000.000; 10) El día 29 de febrero del año 2020, por \$7.000.000; 11) El día 29 de febrero del año 2020, por \$1.000.000; 12) El día 2 de marzo del año 2020, por \$2.000.000.

Una vez que consumaba la sustracción, el acusado procedía a borrarse como destinatario para no dejar rastro aparente del delito cometido:

Todas las transferencias electrónicas de fondos que efectuó el señor Vergara Calderón desde la cuenta corriente de CRC que le había sido confiada por sus superiores hacia su cuenta corriente personal N° 972015898 de Banco Scotiabank, alcanzan la suma total de \$59.400.000.

HECHO N°2: “Como se indicó el Centro de Recuperación y Cobranza, filial del Banco Scotiabank Chile, filial a cargo de perseguir el pago de distintos créditos que tiene en su favor el banco y conciliar las distintas partidas que se derivan de esto, lo cual es una actividad del giro habitual de cualquier banco por los servicios que prestan a la sociedad.

El Centro de Recuperación y Cobranza, recibe dineros en virtud de una cobranza judicial o extrajudicial y es así como por una parte los clientes morosos a veces pagan en Servipag, empresa que tiene a su cargo la recepción de pagos de clientes con productos en mora, dineros que luego son abonados a cuentas corrientes cuyo titular es el Centro de Recuperación y Cobranza. Además y, por otra parte, el dinero recibido



por el Banco en virtud de una cobranza judicial o extrajudicial se almacena en una cuenta contable VAC, en la cual se tienen, de manera provisional, todos los dineros que obtiene el Banco en virtud de procedimientos de cobranza. Es por lo señalado que, la cuenta contable VAC se utiliza para recibir los dineros obtenidos de cobranzas, para que una vez que esté determinado el monto total de la deuda de un cliente, este dinero se mantenga en las arcas del Banco, o se les pague a los abogados externos por gastos asociados a cobranza extrajudicial o se les restituyan a clientes porque pagaron un monto mayor que el que les correspondía. A su vez, cada cuenta VAC se asocia a un cliente, para así tener registrado que es lo que éste ha enterado en cumplimiento de sus obligaciones para con el Banco en virtud de un procedimiento de cobranza judicial o extrajudicial.

Pues bien, el imputado Oscar Vergara Calderón, desempeñando funciones en el Centro de Recuperación y Cobranza del Banco Scotiabank, ubicado en calle Agustinas N° 1185, comuna de Santiago Centro, con el objeto de defraudar al Banco Scotiabank, ingresó a través del sistema de solicitudes para que el Input Contable procesara el cargo en las cuentas corrientes del Centro de Recuperación y Cobranza (N° 973121057 y N°970143521) o procesara el cargo a cuentas Vac asociadas a distintos clientes, para lo cual en ambos casos subía o ingresaba un archivo Excel una serie de operaciones inexistentes, falsas, sin fundamento, que constituían traspasos en el que detallaba las cuentas de abono y concertado con el imputado Raúl Pérez Jilberto (ya condenado por estos hechos) , tercero ajeno al Banco pero que desde el mes de Septiembre del año 2020 es titular de la cuenta corriente Scotia Light N° 978778933, para dichos fines de defraudar, abonar en la cuenta de éste último, en forma reiterada desde el mes de Septiembre de 2020 y hasta el momento de la detención de los imputados, la suma o monto cercano o aproximado de \$966.092.814 pesos, dineros de abonos que no obedecen a operaciones bancarias con justificación comercial, sino precisamente a transferencias de cuentas corrientes del CRC y cuentas contables Vac, para de esta forma y luego el imputado Raúl Pérez Jilberto, a su vez, transferir dineros a la cuenta personal del imputado Oscar Vergara Calderón, cuenta corriente de Banco Scotiabank N° 972015898 y otras de sus cuentas personales de éste en otros Bancos.



De esta forma, para repartir los efectos provenientes del actuar fraudulento, concertado entre los imputado Vergara Calderón y Pérez Jilberto, se transfería un monto cercano o aproximado al ochenta por ciento de lo defraudado a las cuentas corrientes del Ejecutivo de Servicios del área de CRC”.

A continuación se refieren las transferencias electrónicas:

A. Transferencias recibidas en la CTA CTE de Raúl Pérez Jilberto desde cuentas CRC Scotiabank, 78 abonos por un total de \$133.629.064 que se detallan;

B. Transferencias recibidas en la CTA CTE de Oscar Vergara Calderón, desde origen CTA CTE de Raúl Pérez Jilberto. Total de \$95.635.109 pesos, detallándose 52 transacciones;

C. Transferencias recibidas en la CTA CTE de Raúl Pérez Jilberto desde cuentas VAC Scotiabank, individualizándose 184 abonos por un total de \$820.214.952.

D. Transferencias recibidas en la CTA CTE de Oscar Vergara Calderón, desde origen CTA CTE de Raúl Pérez Jilberto, detallándose 237 transferencias por un total de \$663.429.422;

E. Transferencia recibida en la CTA CTE de Raúl Pérez Jilberto desde cuentas Scotiabank, 1 TEF por un total de total de \$12.248.798;

F. Transferencia recibida en la CTA CTE de Oscar Vergara Calderón, desde cuenta CTE de Pérez Jilberto, 2 TEF por un total de total de \$7.000.000.

HECHO N°3: “El imputado Oscar Vergara Calderón, desempeñando funciones en el Centro de Recuperación y Cobranza del Banco Scotiabank, ubicado en calle Agustinas N° 1185, comuna de Santiago Centro, con el objeto de defraudar al Banco Scotiabank, ingresó al sistema de solicitudes de traspasos contables, una serie de operaciones inexistentes, falsas y sin fundamento, abonando en la cuenta Scotiamax N° 862188604 de su padre Oscar Vergara Rojas, la suma total de \$4.017.962 pesos, dineros de abonos que no obedecen a operaciones bancarias con justificación comercial, sino precisamente a transferencias de cuentas contables Vac.

Se detallan operaciones realizadas: 1. El día 27 de abril del año 2020, por \$1.400.000; 2. El día 7 de julio del año 2020, por \$1.500.000; 3. El día 23 de septiembre del año 2020, por \$1.117.962.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NWFNXQBSUJH

Quinto: Que, a continuación, la sentencia procede a realizar la calificación jurídica de los hechos, señalando, en lo medular:

A.- Respecto del denominado “Hecho N° 1”: el tribunal concluyó que se está en presencia de un delito de apropiación indebida. En los hechos, el acusado participaba de la operación de trasladar los dineros desde la cuenta del CRC del banco BCI -que correspondía a los pagos realizados en Servipag por los clientes morosos-, hacia la cuenta del CRC del banco Scotiabank. Para ello al acusado se le confió dos dispositivos digital digipass. Así, en los hechos, lo que hace la filial del CRC es entregarle el control total de la cuenta al acusado, pues inicialmente se contempló la dualidad de dispositivos digipass, para realizar un control cruzado o el control por oposición.

Así, refiere, resultó incuestionable que el acusado efectivamente tenía parte de la operación del traslado y administración de los recursos de la cuenta perteneciente al CRC del banco BCI, gozando de una inusual autonomía respecto del manejo de los dineros habidos en la cuenta perteneciente al CRC. El acusado distrajo los dineros hacia su propia cuenta, apropiándose los, y con ello causó el perjuicio cuya responsabilidad se persigue en el presente juicio.

De esta forma, los hechos acreditados en autos caben dentro de los dos verbos rectores de la figura penal de apropiación indebida. En este caso lo que se defrauda es la expectativa de cuál era el fin del dinero, y eso correspondía a que ellos fueran traspasados de la cuenta del banco BCI e ingresaran a la cuenta del banco Scotiabank, y eso no se hizo, pues en definitiva se distrajeron los fondos, el acusado los desvió a su propia cuenta bancaria, para en definitiva también apropiándose los.

B.- Respecto del “Hecho 2”: Se cumplen todos los presupuestos del tipo penal de estafa, toda vez que en el caso concreto, se acreditó que cuando su nueva jefatura le pide al acusado uno de los dispositivos digipass que estaban en su poder, -y con ello se le quita el control de la administración de la cuenta corriente del banco Scotiabank-, viéndose impedido de disponer libremente de los fondos existentes en la misma, lo que hace es cambiar el modo de operar para apropiarse de los dineros.

Para ello genera un ardid, abusando de la confianza depositada en él, consigue una autorización genérica de su jefatura, y utilizando su labor, que



era enviar a Input Contable las nóminas de los traspasos que debían hacerse a las cuentas VAC para la cuadratura de las cuentas, ocupando nomenclaturas similares para impedir que un control riguroso descubriera la operación, y además, unido a una autorización genérica de su jefatura para este tipo de operaciones, logró transferir dineros desde esta cuentas, en primer lugar, a la de su padre y, posteriormente, a la cuenta de Pérez Jilberto, desde donde las obtuvo, totalmente, tratándose de la cuenta del padre (al que le pidió sus claves del banco para operar), o en un 80% tratándose de los dineros transferidos a Pérez Jilberto.

Como consecuencia de su accionar, el acusado logró una disposición patrimonial de parte del CRC del banco Scotiabank en su favor, y que generó un evidentemente perjuicio patrimonial por más de novecientos millones de pesos. Añade que esto no solo en perjuicio de una persona, sino en varias, porque en algunos casos era el perjudicado el banco, si es que tenía en esas cuentas saldo a favor del banco, o en algunos casos los propios clientes. Lo que resulta patente en la forma en cómo se descubre el fraude, esto es, porque un cliente realiza un reclamo de dineros faltantes en su cuenta VAC en la sucursal de Calama.

Ahora bien, fue el criterio del tribunal entender que se deben agrupar los hechos dos y tres de la acusación en uno solo, pues finalmente lo único que cambia en estos hechos es a quién ocupó el acusado como intermediario para recibir los fondos, ya sea al señor Pérez Jilberto o a su padre, pero ambos actuaron de testaferros para obtener el acusado un beneficio personal, el que fraguó a través de un mismo tipo de engaño e indujo a error a la víctima.

En consecuencia concluye que los hechos dos y tres de la acusación fiscal deben enmarcarse en una sola figura típica, esto es, en la figura típica de estafa del artículo 468 en relación con el artículo 467 número 1, vigente a la época de los delitos.

Agrega que todos estos elementos de los tipos penales probados tienen entre sí una relación causal en que cada uno de ellos conlleva al otro en una continuidad lógica e indisoluble. Así entonces, se concretan las figuras previstas en los artículos 470 N° 1 del Código Penal, esto es, apropiación indebida, y la prevista en el artículo 468 del Código Penal, esto es, el delito de estafa.



Por otro lado, los injustos se encuentran en grado de desarrollo consumados, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 del Código Punitivo.

Respecto de la alegación de la defensa en cuanto a existir un único delito continuado, el tribunal lo descarta, refiriendo que estos delitos deben ser castigados conforme a la regla del artículo 351 del Código Procesal Penal. Ello por cuanto el Código no contiene ninguna norma expresa que regule lo relativo al delito continuado. Agrega que se trata, en consecuencia, de una construcción doctrinaria que, en algunas ocasiones, ha sido reconocida por la jurisprudencia –sin desconocer que precisamente para casos similares a los enjuiciados-. Por lo demás, entiende el tribunal que se trataría de una institución respecto de la cual no hay certeza en la doctrina respecto a su procedencia, por ejemplo, tratándose del requisito del sujeto pasivo, pues algunos autores exigen que haya unidad de sujeto pasivo, es decir, que se trate de una misma víctima. Y resulta que, en este caso, precisamente no hay una única víctima, porque quedó asentado en juicio que hubo cuentas VAC de clientes del banco que fueron afectados, porque efectivamente esas personas tenían fondos en sus cuentas que eran de su propiedad.

Finalmente sostiene que nuestro legislador chileno dio una solución precisa para delitos de la misma especie que fueran reiterados, cuya solución tiene por objeto evitar la exasperación de las penas. Esta es precisamente la regla del artículo 351 del Código Procesal Penal, la que habla de delitos reiterados.

Así al determinar la pena, señala que el artículo 351 del Código Procesal Penal, que regula la reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie, obliga a imponer la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados.

En consecuencia, en virtud de los doce (12) hechos vinculados al delito de apropiación indebida, y doscientos sesenta y seis (266) relacionados con el delito de estafa, se aumenta la pena en dos grados. Así, concurriendo dos atenuantes de responsabilidad en favor del acusado –después del aumento-, se rebajó en un grado la pena, quedando en definitiva la pena en el marco de presidio mayor en su grado mínimo, que va de cinco años y un día a diez años, extensión temporal que es menor a la que le correspondería si se considerara cada uno de los delitos aisladamente.



En conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, y fijando una pena que se corresponda con la extensión del mal causado, considerando el monto defraudado y que el dinero nunca fue recuperado por la víctima, corresponde aplicar en la especie una única pena de siete (7) años de presidio mayor en su grado mínimo.

Sexto: Que, para resolver, basta con señalar que el delito continuado no cuenta con consagración legal en nuestra legislación, sino que, tal como lo reconoce el fallo impugnado, aquél corresponde a una creación doctrinaria que ha recibido recepción por parte de la jurisprudencia nacional, cumpliéndose determinadas exigencias.

En este punto, a juicio de esta Corte, la sola circunstancia antes descrita permite rechazar el arbitrio intentado, que corresponde a un arbitrio de derecho estricto, por lo que la causal invocada, esto es haber realizado una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, requiere la denuncia de infracción de normas jurídicas específicas cuya obligación sea obligatoria para los magistrados, exigencia que, como se anunció, no se cumple, puesto que aquello que se aduce no fue aplicado, corresponde a una creación dogmática sin consagración legal expresa.

Es en esta línea argumental que, en este caso, la sentencia impugnada se pronunció respecto de la alegación de la defensa vinculada a la existencia de un delito continuado, lo que es descartado, atendida la ausencia de reconocimiento legal para su procedencia, sin perjuicio que, además, aceptado que eventualmente sea aplicable, refiere que no se configuran los supuestos exigidos por la doctrina, por cuanto no existe unidad de sujeto pasivo.

Séptimo: Que, no obstante lo señalado, cabe señalar, a mayor abundamiento, que aquella parte de la doctrina que acepta la aplicación del concepto de delito continuado en nuestra legislación, establece determinados criterios generales para su procedencia, aun cuando incluso en esta materia existen discrepancias respecto de los elementos que lo componen.

Asentado lo anterior, se debe precisar que se ha señalado que el delito continuado consiste en una pluralidad de acciones, cada una de las cuales satisface en todas las características de un tipo legal, pero que han de ser valoradas conjuntamente porque constituyen la violación, necesariamente



fraccionada, de una misma norma de deber. En términos más simples, el delito continuado existe cuando, conforme a la representación del autor, no era posible consumarlo sino fraccionadamente (Cury Urzúa, Enrique, "Derecho Penal, Parte General", Ediciones Universidad Católica, séptima edición ampliada, 2005, página 656).

Existe cierto consenso respecto de que el delito continuado requiere un conjunto de conductas que presenten una estrecha relación en lo referido al título de la incriminación y el objeto de la lesión, en que se incluye el bien jurídico y sujeto pasivo. El nexo en el título de incriminación requiere de homogeneidad, pues es esto lo que permite configurar el delito continuado, por lo que es indispensable identidad en el título de incriminación.

Así, para la configuración del delito continuado es indispensable la unidad de acción, que debe estar vinculada a una única norma que resulta vulnerada, debiendo por ello ser exigible una identidad absoluta en el objeto lesionado y en el modo comisivo.

Se ha señalado que para estar en presencia de un delito continuado deben concurrir requisitos objetivos como subjetivos. Entre los primeros están la pluralidad de acción, unidad de norma vulnerada e identidad del sujeto pasivo. En tanto, entre los segundos, se exige la unidad de propósito o dolo.

Octavo: Que, lo anterior es relevante, toda vez que, tal como refieren los sentenciadores, aun aceptando que el concepto de delito continuado está previsto en nuestra legislación, este no sería aplicable en el caso de autos, al menos no en los términos que pretende el recurrente, no sólo porque, como lo indica el fallo, en la especie no hay unidad de sujeto pasivo, toda vez que, se asentó que los dineros que eran desviados, no pertenecían al banco Scotiabank, toda vez que aquellos se transferían de las cuentas VAC, que eran cuentas con depósitos de los clientes quienes pretendían abonar deudas en cobranza judicial o extrajudicial que se mantenían con la institución. Este hecho, inamovible para esta Corte, atendida la causal invocada, determina de forma inequívoca que no existe unidad de sujeto pasivo, deficiencia que impide entrar siquiera a analizar la eventual procedencia en la especie de las diferentes exigencias que la doctrina y alguna jurisprudencia han desarrollado para configurar un delito continuado.



Sin perjuicio de aquello, se debe señalar, además, que el recurrente fue condenado por la comisión del delito de apropiación indebida reiterado y estafa reiterada, considerando que por tratarse de delitos de la misma especie, es aplicable el artículo 351 del Código Procesal Penal que permite elevar la pena en uno o dos grados y, en atención a que los delitos tienen asignada la misma pena, en atención a la cantidad de delitos decide elevar en dos grados; así, luego de considerar las circunstancias dos atenuantes concretas que le permiten rebajar un grado, sanciona con una pena única de siete (7) años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de diez (10) Unidades Tributarias Mensuales, por cuanto atiende, con forme a lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, a la extensión del mal causado, considerando el monto defraudado y que el dinero nunca fue recuperado, determinación de pena más beneficiosa que si se sancionara por los delitos de forma independiente.

Pues bien, se debe tener presente que la sentencia tuvo por acreditado hechos que agrupa dentro de los denominados “Hecho N° 1”, “Hecho N° 2” y Hecho N° 3”. Así, dentro de cada uno de los referidos acápites da por acreditadas conductas que, por sí solas, son constitutivas de cada uno de los delitos que se tiene por configurado en ellos.

Así, dentro del “Hecho N° 1”, se asientan 12 transferencias realizadas en distintas fechas, en que cada una de ellas puede determinar la existencia del delito de apropiación indebida, así, respecto de este ilícito, hipotéticamente se podría determinar, no la reiteración de delitos, sino que la existencia de un delito de apropiación indebida continuado, que tiene asignada una pena de presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales conforme con el numeral primero del artículo 470 del Código Penal.

En tanto, dentro del “Hecho N° 2” y “Hecho N° 3”, se tienen por acreditadas que el sentenciado ejecutó, en días distintos, 266 maniobras que determinaron la disposición patrimonial a través de transferencias de dineros a cuentas de terceros, que luego son enteradas en las arcas del sentenciado, en un 100% en 3 casos y en un 80% en los casos restantes, lo que en teoría permitiría establecer la existencia, de delito de estafa continuado y no un delito de similar naturaleza reiterado, que estaría penado, conforme con el artículo 468 con relación el numeral primero del artículo 467, ambos del Código Penal, vigente a la fecha de comisión de los ilícitos, con la pena de



presidio menor en su grado medio a máximo y multa de once a quince unidades tributarias mensuales.

Asentado lo anterior, se debe tener presente que, más allá que a juicio de estos sentenciadores aquello resulta cuestionable, por la falta de unidad de sujeto pasivo, lo relevante es que no es posible entender que existió un delito continuado entre los ilícitos de apropiación indebida y estafa, toda vez que no existe unidad de título de incriminación, lo que se determinó por cuanto el tribunal dio por establecidas conductas distintas, lo que permitió configurar tipos penales diferentes, sin que baste la circunstancia de constituir delitos de la misma naturaleza, esto es de carácter patrimonial, para establecer la procedencia de un delito continuado, toda vez que aquello está previsto expresamente en nuestra legislación para establecer la existencia de reiteración de delitos, conforme con la norma del artículo 351 del Código Procesal Penal, que es aquello que realizó el sentenciador, por lo que la eventual aplicación del concepto de delito continuado dentro de las hipótesis delictivas de estafa y apropiación indebida y no de reiteración, tendría nulo efecto en la regulación final de la pena, toda vez que, como se señaló, no se puede establecer la unidad de delitos entre aquellos que tienen un título de incriminación normativa distinto, pues no existe unidad de conducta.

Noveno: Que, por lo expresado, procede desestimar el recurso interpuesto por la defensa del acusado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372, 374 y 384, todos del Código Procesal Penal, se decide que **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa de don **OSCAR FÉLIX VERGARA CALDERÓN**, dirigido en contra de la sentencia veintinueve de julio de dos mil veinticuatro cuya copia corre agregada a esta carpeta como en contra del juicio oral que le antecedió, todo en el proceso RIT N° 223-2024, RUC N° 2201175377-2, seguido ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, los que en consecuencia, **no son nulos**.

Regístrese y devuélvase la competencia.

Redacción de la Ministra Sra. Sandra Araya Naranjo.

Ingreso Corte Penal Rol N° 4676-2024.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NWFNXQBSUJH

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, además, por la ministra señora Sandra Araya Naranjo y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo. No firman, la ministra señora Araya, por encontrarse en comisión de servicio y el abogado integrante señor Gómez, quien concurrió a la vista de la causa y al acuerdo, por no encontrarse al momento de hacerlo.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NWFNXQBSUJH

Proveído por el Señor Presidente de la Primera Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

